



**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

**EXPEDIENTE PLENO: 375/2021**  
**RECURSO: RECLAMACIÓN**  
**ORIGEN: [REDACTED] SALA UNITARIA**  
**JUICIO ADMINISTRATIVO: [REDACTED]**  
**ACTOR:**  
**[REDACTED]**  
**(RECURRENTE)**  
**DEMANDADA:**  
**SECRETARÍA DEL TRANSPORTE DEL**  
**ESTADO DE JALISCO Y OTRA**  
**PONENTE: MAGISTRADA**  
**FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE**

**GUADALAJARA, JALISCO, A 20 VEINTE DE MAYO DEL  
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.**

**V I S T O S** los autos originales para resolver el Recurso de Reclamación interpuesto por la Parte Actora en el juicio administrativo [REDACTED] del índice de la [REDACTED] Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa.

### **R E S U L T A N D O**

**1.-** Con escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este Tribunal de Justicia Administrativa el día 12 doce de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, por [REDACTED], con el carácter de Parte Actora, interpuso Recurso de Reclamación en contra del Auto de fecha 23 veintitrés de noviembre del 2020 dos mil veinte, dictada por el Magistrado Presidente de la [REDACTED] Sala Unitaria, en el expediente número [REDACTED].

**2.-** Mediante acuerdo del 5 cinco de abril del año 2021 dos mil veintiuno, el Titular de la [REDACTED] Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional tuvo por recibido el Recurso de Reclamación planteado, ordenando remitir los autos originales a esta Sala Superior para la resolución del recurso de cuenta.

**3.-** Mediante oficio [REDACTED] del Magistrado Titular de la [REDACTED] Sala Unitaria de este Tribunal, recibido el 7 siete de abril del año 2021 dos mil veintiuno, ante Oficialía de Partes Común de este Órgano Jurisdiccional, remitió a esta Sala Superior los autos originales del juicio en materia administrativa del expediente [REDACTED] para la resolución del Recurso de Reclamación interpuesto por la Parte Actora.

**4.-** En acuerdo del 22 veintidós de abril del año 2021 dos mil veintiuno, dictado en el Expediente Sala Superior 375/2021, se tuvieron por recibidos los autos originales del juicio [REDACTED] Así mismo se dio cuenta que en la Sexta



Sesión Ordinaria de la Sala Superior de la fecha citada, se designó como Ponente a la Magistrada FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRR

E, Mesa 2, para pronunciar el proyecto de resolución, ordenándose girar oficio a éste, formar el expediente correspondiente y remitirle los autos. Lo que se realizó mediante oficio [REDACTED] recibido el 23 veintitrés de abril del 2021 dos mil veintiuno.

## CONSIDERANDO

**I.-** La competencia de la Sala Superior de este Tribunal para conocer y resolver el presente Recurso de Reclamación, encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política de la Entidad, 7, 8 numeral 1, fracción I y XVII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y 89 al 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

**II.-** El acuerdo recurrido como los agravios hechos valer en su contra, no serán transcritos en virtud de que los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de esta Sala Superior, se satisfacen con la precisión de los puntos debatidos derivados del escrito de expresión de agravios. No obstante, para su estudio y análisis se sintetizarán más adelante, atento a la fracción I del numeral 430 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma supletoria conforme al presupuesto 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los **conceptos de violación** o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de***



*legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal **transcripción**, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”*

**III.-** El único agravio hecho valer por el actor recurrente es fundado, lo que obliga a revocar el acuerdo recurrido por las razones y consideraciones jurídicas que a continuación se vierten.

El auto aquí combatido no admitió la demanda al considerar que la actora omite acompañar los actos administrativos impugnados a su libelo.

En contra de lo anterior, bajo el agravio único, el actor refiere que es ilegal el acuerdo que recurre porque a su escrito inicial de demanda agregó los documentos requeridos para la admisión de la demanda, consistentes en la copia certificada de la factura original del vehículo de su propiedad, escrito dirigido a la Secretaría de Transporte en que solicita copias certificadas de las infracciones impuestas a su automotor, así como la impresión del adeudo vehicular.

Asiste la razón a la recurrente pues esa documentación a que alude es suficiente para admitir la demanda en el caso concreto, ya que desde su escrito inicial de demanda visible a fojas 1 a 7 del expediente en que se actúa, el actor manifestó desconocimiento de los actos administrativos que ocurre a impugnar ante este Órgano Jurisdiccional, ello, dijo, al no haberle sido debidamente notificados.

En efecto, la no admisión de demanda obstruye el derecho de audiencia y defensa, por lo que, lo conducente es admitir la demanda a trámite en atención a los principios de legalidad y tutela judicial efectiva con apego a lo consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con aplicación al principio in dubio pro actione o favor actionis, para una efectiva tutela jurisdiccional, pues durante la tramitación del juicio puede acreditarse la existencia de los actos controvertidos y quienes tienen el carácter de autoridades demandadas en sus respectivas contestaciones una vez emplazadas, ya que del escrito inicial de demanda puede observarse que los actos impugnados son propiamente los folios de infracción mismos que a su decir nunca le fueron notificados, sino que se percató



de su existencia cuando ingreso a la página del gobierno del estado denominada “adeudos vehiculares”, que las desconocía ya que jamás le fueron notificadas por las autoridades.

Es aplicable por la Obligatoriedad que le reviste, la jurisprudencia de esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación:

*“JURISPRUDENCIA - Epoca: SEGUNDA TOMO I Publicada el día  
Sábado 17 de Agosto de 2019 Periódico Oficial del Estado Pag(s). 7  
Rubro:*

***ADMISION DE LA DEMANDA, CUANDO EL DEMANDANTE MANIFIESTE DESCONOCER LA RESOLUCION IMPUGNADA, NO DEBE EXIGIRSE LA EXHIBICION DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL ACTO CONTROVERTIDO. Ante la negativa manifiesta del demandante de conocer los actos impugnados, corresponde a la autoridad administrativa la obligación de exhibir los documentos relativos al origen de los créditos fiscales controvertidos al momento de realizar la correspondiente contestación de demanda, esto a fin de desvirtuar la negativa de la parte actora y, en su caso, para que el accionante tenga la oportunidad de conocerlos y controvertirlos en el escrito de ampliación de demanda en términos del artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. En consecuencia, en el caso que el demandante niegue lisa y llanamente conocer la resolución controvertida, es incorrecto negar el trámite de la demanda con el argumento de que el promovente no demostró la existencia del documento fundatorio con el que demostrara el ejercicio de la acción.”***

En dicha virtud, demostrada la ilegalidad de la resolución combatida lo procedente es declarar fundado el agravio único hecho valer en el presente recurso de reclamación, revocar la resolución recurrida **únicamente en lo impugnado, quedando intocado lo relativo a abogados patronos, autorizado, domicilio procesal y correo electrónico**, para quedar en los términos siguientes:

**SE ADMITE DEMANDA, PRUEBAS, ORDENA EMPLAZAR, PREVIENE Y APERCIBE, SEÑALA CORREO ELECTRÓNICO**



**GUADALAJARA, JALISCO A 23 VEINTITRÉS DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.**

Por recibida en la Oficialía de Partes Común, el día 28 veintiocho de octubre pasado, la demanda que suscribe [REDACTED], quien interpone JUICIO DE NULIDAD, con fundamento en los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como 1, 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa de la misma entidad, se admite la demanda en contra de la autoridad siguiente:

**SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO.**

Se tienen como actos administrativos impugnados los folios; [REDACTED] Y [REDACTED]

Se admiten las pruebas documentales que ofrece, haciéndolas consistir en copia certificada de la factura que agrega, un acuse con sello de fecha 14 de octubre del 2020 dos mil veinte, copia simple de una credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, y la impresión de pantalla de adeudo vehicular que exhibe, así como la tarjeta de circulación en original con folio [REDACTED] por encontrarse ajustada a derecho y no ser contraria a la moral, teniéndose por desahogadas dada su propia naturaleza y con citación a la contraria, como lo dispone el numeral 48 de la Ley de la Materia y 91 bis del Enjuiciamiento Civil del Estado de aplicación supletoria.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y sus anexos, córrase traslado a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de 10 diez días, contados a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente proveído, produzca contestación a la demanda, ofrezcan y exhiban pruebas, apercibiéndose que en caso de no hacerlo, se le tendrán como ciertos los hechos que no sean contestados, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se le declarará por perdido el derecho a rendir pruebas según corresponda, lo anterior con apoyo en lo establecido por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.





## ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Con fundamento en los artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, IV, y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 4° párrafo 1 fracciones I y III y párrafo 2, y 15 párrafo 1 fracciones I, II, V, y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios; y 4 inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco; **se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es información pública fundamental**, por lo que este Tribunal se encuentra obligado a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo.

Lo anterior es así pues corresponde a la competencia constitucional de este Tribunal, la impartición de justicia especializada en dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; así como imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales; materias cuyas disposiciones son de orden público e interés social pues se refieren a los mecanismos constitucionales dl combate a la corrupción, la preservación de la seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la legalidad y del Estado democrático de derecho, así como la rendición de cuentas de todas las autoridades por medio de la transparencia y el acceso a la información.

De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer en principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad.



De esta manera, con apoyo y fundamento en dispuesto por los artículos 73, 89 al 95 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco, se resuelve la presente controversia, con los siguientes

### **RESOLUTIVOS**

**PRIMERO.** – Es fundado el agravio contenido en el Recurso de Reclamación interpuesto por [REDACTED], con el carácter de Parte Actora, en contra del Auto de fecha 23 veintitrés de noviembre del 2020 dos mil veinte, dictada por el Magistrado Presidente de la [REDACTED] Sala Unitaria, en el expediente número [REDACTED].

**SEGUNDO.** - Se **revoca** el acuerdo recurrido, por los motivos y consideraciones legales que se contienen en el último Considerando de esta Resolución.

**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.**

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos de los Magistrados José Ramón Jiménez Gutiérrez (Presidente), Fany Lorena Jiménez Aguirre (Ponente) y Avelino Bravo Cacho, ante el Secretario General de Acuerdos Sergio Castañeda Fletes, quien autoriza y da fe.

Magistrado José Ramón Jiménez  
Gutiérrez  
**Presidente**

Magistrada Fany Lorena Jiménez  
Aguirre  
**(Ponente)**

Magistrado Avelino Bravo Cacho

Sergio Castañeda Fletes  
Secretario General de Acuerdos



FLJA/JMVR

“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”